

URBANISMO CAÓTICO, ESPECULACIÓN E INJUSTICIA SOCIAL.

LA BATALLA CIUDADANA EN ALBACETE, 1974-1979*

Óscar J. Martín García

Instituto de Historia

Centro de Ciencias Humanas y Sociales

CSIC

Introducción

En la introducción de un reciente trabajo Pablo Sánchez León y Vicente Pérez Quintana han destacado que el movimiento vecinal de mediados de los años setenta representó un actor social de primer orden en el “desmoronamiento de la legitimidad de la dictadura”¹. Ya a principios de los años ochenta Manuel Castells señaló que la protesta vecinal que eclosionó en España después de la muerte de Franco y durante la transición representó el movimiento ciudadano más importante en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial². Aquel contribuyó decisivamente a generar cambios profundos en el espacio, en la cultura y en la política al conseguir la mejora estructural en el equipamiento colectivo de la periferia urbana, al recuperar antiguos espacios de sociabilidad y cultura popular, al ser escuela de aprendizaje democrático y, sobre todo, al contribuir –junto a la labor disidente de otros movimientos sociales y partidos de oposición- a crear las condiciones políticas en las que tuvo lugar la transición a la democracia en España³.

Sin embargo, el movimiento vecinal del tardofranquismo no ha recibido la atención historiográfica habitualmente dirigida a otros actores sociales del periodo como trabajadores, estudiantes, grupos nacionalistas, etcétera⁴. Desinterés aún mayor si los

* Las presentes reflexiones han sido redactadas en el marco del proyecto de investigación “Movimientos sociales en Castilla-La Mancha durante el segundo franquismo y la transición (1959-1979)”, HUM2006-14138-C06-03.

¹ Pablo SÁNCHEZ y Vicente PÉREZ, “Introducción. Cuarenta años de movimiento ciudadano”, *Memoria ciudadana y movimiento vecinal. Madrid, 1968-2008*, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2009, pág. 14.

² Manuel CASTELLS, *The City and the Grassroots: A Cross-Cultural Theory of Urban Social Movements*, Berkeley, CA Press, 1983, pág. 215.

³ Manuel Castells, “Productores de ciudad: el movimiento ciudadano de Madrid”, Pablo SÁNCHEZ y Vicente PÉREZ, *Memoria ciudadana y movimiento vecinal. Madrid, 1968-2008*, ob. cit., págs. 21-22.

⁴ Aparte de los ya clásicos trabajos de Javier Castells y Jordi Borja o de las interesantes investigaciones de autores como Radcliff o Hernández Ramírez, apenas se han publicado monografías sobre esta cuestión hasta la reciente aparición de la obra anteriormente citada. No obstante, un repaso por las comunicaciones presentadas al II Congreso de Jóvenes Investigadores en Historia Contemporánea (Granada, septiembre de 2009) revela un creciente interés entre los historiadores noveles por el movimiento vecinal.

colectivos vecinales de referencia no son los ubicados en los centros urbanos más populosos e importantes del país. En consecuencia, la historia de la participación cívica y del compromiso democrático de los vecinos de ciudades menores ha sido doblemente oscurecida por las narrativas de una transición decidida y modelada, según la versión dominante, en los pactos y negociaciones entre élites⁵. De este modo, si en los análisis del proceso democrático han prevalecido los acercamientos desde arriba que diluyen la importancia de la conflictividad social, otra importante traba para la comprensión del periodo es la indiferencia por las experiencias de movilización y disenso político protagonizadas por aquellos colectivos radicados en la “otra España”, lejos de los principales centros urbanos e industriales del país. Por esta razón, con el fin de rellenar en lo posible ambas parcelas pocas consideradas en la historiografía sobre el cambio político en España, el trabajo presente pretende analizar las condiciones urbanas, sociales y políticas en las que nació y creció el movimiento vecinal de la ciudad de Albacete, así como papel que el mismo desempeñó en la deslegitimación y erosión del poder franquista en el mundo municipal.

Emigración, escasez de viviendas y especulación

Entre 1940 y 1975 aproximadamente unas 210.000 personas abandonaron la provincia de Albacete para emigrar al extranjero o a otras partes del país. Un sustancial movimiento de población complementado con la emigración intraprovincial desde el campo a la capital. Así, si en 1900 la ciudad de Albacete representaba el 9 por 100 de toda la población provincial, a principios de los ochenta esta cifra había ascendido al 35 por 100. Este proceso de concentración poblacional fue especialmente intenso en las décadas de los sesenta y setenta. En quince años, desde 1960 a 1975, la ciudad aumentó su población en algo más de un 35 por 100, pasando de los 74.000 efectivos de inicios de los años sesenta a los 102.000 habitantes registrados a mediados de la década siguiente⁶. El motor de dicho crecimiento fue el trasvase, a ritmo de más de mil habitantes por año, de unos 15.000 inmigrantes procedentes del medio rural provincial entre 1961 y 1970⁷.

⁵ Una visión crítica de este tipo de interpretaciones en Óscar J. MARTÍN GARCÍA, *A tientas con la democracia*, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2008.

⁶ Miguel PARDO, “El auge de los servicios”, Antonio SELVA, A. (coord.): *XXV años de Historia social y económica en Albacete 1977-2002*, Albacete, Instituto de Estudios Albacentenses, 2003, pág. 284.

⁷ OFICINA MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO, *Albacete: una aproximación a su realidad urbana*, Ayuntamiento de Albacete, 1982, pág. 8.

Esta notable afluencia de inmigrantes provocó, ante la incapacidad y falta de voluntad de las autoridades locales para proveer a los recién llegados del salario social adecuado en términos de alojamiento y servicios colectivos, una importante escasez de viviendas y de equipamientos públicos. A la altura de 1964 el déficit en la ciudad de Albacete alcanzaba ya la voluminosa cifra de las diez mil viviendas⁸. Una situación que persistía casi diez años después. En 1973, un informe de la Delegación Provincial de la OS calificó de “problema grave la falta de viviendas de tipo económico para trabajadores” en Albacete. El insuficiente número de viviendas para abastecer las demandas de las empobrecidas clases trabajadoras que habían huido del misérrimo medio rural fue utilizado por los gobernantes locales para justificar un aumento voraz de la construcción. Así, el alcalde de Albacete defendió en 1970 la sistemática vulneración del PGOU con el fin de impulsar “una industria [constructora] de gran volumen” que pusiese fin a la “emigración en masa” y que dotase de una vivienda digna a muchos albacetenses sin casa. El efecto no fue otro que el estallido de un tan acelerado como caótico crecimiento urbano que hizo de la capital provincial “una verdadera tierra de promisión” para los “especuladores de la construcción”⁹. Bajo esta fiebre constructora la “Nueva York de la Mancha” acreditó tal apelativo al encarnar un modelo urbanístico caracterizado por una “promoción inmobiliaria salvaje”, alentada por una “administración local tolerante, cuando no interesada, un gran apoyo financiero, el aliciente de un dinero fácil y una demanda importante”¹⁰. Las consecuencias no se hicieron esperar en forma de intensa degradación urbanística de la ciudad, cuyo deterioro fue calificado por Chueca Goitia como muy grave, de índice diez sobre diez.

Pero la voraz agresión contra el patrimonio artístico y arquitectónico y la inobservancia de la Ley del Suelo de 1956 conllevaron irregularidades urbanísticas de tal gravedad que no pasaron desapercibidas. Llegaron incluso a sonrojar a algunos miembros del establishment político provincial, quienes desde la prensa adicta denunciaron veladamente la connivencia de algunos prohombres locales del régimen con censurables actuaciones urbanísticas¹¹. A este respecto no hay que olvidar que el alcalde de Albacete entre 1966 y 1974 paralelamente fue asesor jurídico de una importante constructora, Cubiertas y Tejados, y que tanto el secretario municipal como

⁸ CONSEJO ECONÓMICO SINDICAL PROVINCIAL, *Estructura y perspectivas de desarrollo económico en la provincia de Albacete*, Organización Sindical, 1971, pág. 127.

⁹ Fernando CHUECA, *La destrucción del legado urbanístico español*, Madrid, Espasa Calpe, 1977, págs. 333-336.

¹⁰ OFICINA MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO, Ob.cit, pág. 19.

¹¹ *La Voz de Albacete*, 7-9-1971, pág. 17-57 (Número especial de feria)

algunos concejales estuvieron turbiamente vinculados a negocios inmobiliarios¹². Según denunció la oposición clandestina, UDASA, una sociedad inmobiliaria con participación del Ayuntamiento, “en lugar de luchar contra la especulación del suelo, la fomenta”¹³.

No obstante, el imparable ritmo constructivo no alivió la carestía de viviendas. En realidad, dicha escasez no estuvo relacionada tanto con la cantidad como con la restringida accesibilidad social a las mismas. De hecho, la propia jerarquía vertical reconoció que buena parte de las viviendas construidas en Albacete importaban “cantidades demasiado elevadas en relación con la posición económica de los trabajadores”¹⁴. Así, la insuficiencia de casas sociales persistió a pesar de que entre 1950 y 1970 el número de nuevas edificaciones se triplicó mientras que la población tan sólo llegó a duplicarse. Lo que explica que de las diez mil viviendas construidas entre 1960 y 1970 un 14 por 100 quedasen sin habitar y un 9 por 100 fuese adquiridas para uso secundario. Se hace patente, por tanto, que el esfuerzo de las autoridades municipales franquistas en la promoción del mencionado boom de la construcción no tuvo como fin saciar la necesidad de viviendas para los trabajadores sino colmar los intereses de unos promotores inmobiliarios que dirigieron sus negocios hacia las rentas medias o elevadas. Un buen ejemplo de ello fue el caso del polígono de San Antón, que según un estudio municipal “sigue la construcción de viviendas que mantienen comparativamente un alto *standing*, lo que las dirige a una demanda más solvente, no colaborando, por lo tanto, en la resolución endémica de la falta de viviendas para las capas de menores ingresos”¹⁵.

Las divisiones sociales marcadas en el espacio

La mencionada explosión de una urbanización desordenada y desenfrenada no fue algo estrictamente físico y al margen de las relaciones sociales y de la distribución del poder político¹⁶. En este sentido, dicho proceso fue reflejo de un sistema urbano caracterizado por su naturaleza dictatorial, por la centralización económica y espacial y

¹² Óscar J. MARTÍN GARCÍA, *Albacete en transición. El Ayuntamiento y el cambio político, 1970-1979*, Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses, 2006, págs. 155-175.

¹³ Citado en Óscar J. MARTÍN GARCÍA, *El cambio político desde abajo. Protesta y conflictividad social, Albacete (1966-1977)*, Tesis doctoral, Universidad de Castilla-La Mancha, 1 de diciembre de 2006, pág. 186.

¹⁴ AHPA. OS. Delegación Comarcal de Casas Ibáñez. Delegación Comarcal. Caja 3689.

¹⁵ OFICINA MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO, ob. cit., pág. 20.

¹⁶ Víctor URRUTIA, *El movimiento vecinal en el área metropolitana de Bilbao*, Bilbao, Instituto Vasco de Administración Pública, 1986, págs. 94-105.

por la promoción de los beneficios del capital inmobiliario¹⁷. Por este motivo sus efectos no quedaron reducidos a la degradación urbanística, la saturación del tráfico o el aumento de los ruidos en las calles de Albacete. Juntos a éstos también tuvo lugar un proceso que estructuró el espacio en función de las divisiones de clase, provocando de esta forma una urbanización de las desigualdades plasmada en la creación de las “dos ciudades de Albacete”¹⁸. Una fue la central, oficial y rica, donde residía y trabajaba la burguesía local y el establishment político. Esta “parte noble” de la ciudad impuso sus fronteras alrededor del “estrecho eje marcado por una sociedad cerrada y jerarquizada en el que está integrado todo lo que suena y repercute, centros oficiales, cines, bancos, residencias”¹⁹.

La “otra” fue la “no ciudad” o suburbio periférico. Pobre, marginal y subordinada, carente de los más elementales equipamientos colectivos. Allí donde “los hechos no suenan, o suenan poco o no tienen percusión”. Víctima esta ciudad desparramada por los arrabales de un “centralismo local que ignora lo que sucede en las otras zonas de la ciudad”. En efecto, el modelo urbano oficialmente patrocinado llevó consigo una división y jerarquización del espacio que propició la subordinación de la periferia al centro. El corto trecho geográfico que separó a ambas partes de la ciudad - desgajadas por una carretera de circunvalación que hizo las veces de frontera o “cordón sanitario” en términos sociales, económicos y políticos- se hizo muy extenso en términos de aislamiento y “distancia social”. No por casualidad, según un estudio municipal, en el casco urbano se concentró el mayor nivel de equipamiento administrativo, sociocultural (bibliotecas, cines, teatros, etcétera), docente, religioso y comercial²⁰. Los más perjudicados fueron los niños que tuvieron que desplazarse a colegios alejados de sus barrios. Como protestaron sus vecinos, en La Vereda y las Cañicas las “escuelas más próximas se encuentran a casi dos kilómetros, con el agravante de que los niños tienen que cruzar la carretera de circunvalación con el riesgo que ello entraña”. Peligro verdadero pues la ronda se cobró la vida de varios niños de la periferia cuando transitaban hacia las escuelas más cercanas. Por tanto, como denunciaron los comunistas del barrio de Pedro Lamata “no es sorprendente que esta situación se de allí

¹⁷ Manuel CASTELLS, *Crisis urbana y cambio social*, Madrid, Siglo XXI, 1981, págs. 201-202.

¹⁸ Aquí se utilizan algunos conceptos expresados en Chris EALHAM, *La lucha por Barcelona. Clase, cultura y conflicto 1898-1937*, Madrid, Alianza, 2005, pág. 43.

¹⁹ *La Verdad de Albacete*, 23-3-1977 (LV, en adelante).

²⁰ En aquellos servicios que no se concentraron en el centro, como hospitales o instalaciones deportivas, la “accesibilidad social” de las clases medias del centro de la ciudad también fue superior.

donde vivimos la clase obrera y no en el centro de la ciudad, donde todos estos servicios por los que luchamos están sobradamente cubiertos”²¹.

En fin, los barrios del extrarradio fueron el producto, y al mismo tiempo sufrieron, la voluntad del urbanismo franquista por ordenar y dividir el espacio urbano en zonas internamente homogéneas y socialmente desiguales²². Tendencia que en último término remitió al intento por preservar las relaciones de dominación e injusticia también fuera centro de trabajo, donde los trabajadores desarrollaron sus vivencias cotidianas y prácticas sociales más habituales²³. Como resultado de dicho modelo urbanístico, a la altura del otoño de 1976 cualquier panorámica de Albacete tropezaba con el “cinturón de casas baratas que acordonan la ciudad, y que en un futuro no muy lejano, serán los cochambrosos arrabales de una ciudad que promete lucir suntuosos edificios públicos y lujosos apartamentos para millonarios”²⁴. Esta “lastimosa estampa” de barracas que rodeaba la ciudad comenzó a levantarse a finales de los años cincuenta. Entonces, las partidas de inmigrantes que sólo encontraron terrenos asequibles a sus maltrechas economías en zonas alejadas del casco urbano comenzaron a “levantar su propia casa” en las afueras de la ciudad, “sin permisos, sin arquitectos y sin planos”. Aquellas primeras y deleznales construcciones se alzaron con materiales pobres adquiridos a plazos. Sin “ningún tipo de servicio, ni agua potable, ni alcantarillado”²⁵. Se trató de una autoconstrucción precaria y carente de control público, pero tolerada por unas autoridades que hicieron la “vista gorda” ante las humildes y austeras edificaciones aparecidas casi de “la noche a la mañana” en los arrabales de la ciudad²⁶. De esta manera, en palabras del Ministerio de la Vivienda, se fueron penosamente conformando los “barrios suburbanos de la ciudad en los que las chabolas y el casucho aparecen profusamente”, como San Pedro, El Cerro de la Horca, El Sepulcro, Las Cañicas o Bolera²⁷. Testigos todos ellos de “la cruda realidad de la sobreexplotación de un peonaje

²¹ Fundación Primero de Mayo (FPM). Archivo Historia del Trabajo (AHT). *Boletín de Información Democrática* del PCE (BID), 3, julio 1974, pág. 5.

²² Manuel CASTELLS, *La cuestión urbana*. Madrid, Siglo XXI, 1974, pág. 204.

²³ J. Luis OYÓN BAÑALES, “Historia urbana e historia obrera: reflexiones sobre la vida obrera y su inscripción en el espacio urbano”, *Historia Contemporánea*, núm. 24, 2002, pág. 18.

²⁴ *LV*, 26-10-1976.

²⁵ Seminario de Estudios del Franquismo y de la Transición (SEFT). Entrevista con Luis Landete (24-4-2006), militante del movimiento vecinal y presidente de la AV de San Pedro durante la transición.

²⁶ SEFT. Entrevista con Juan Fernández Selva (25-3-2006), cura obrero, militante de la HOAC y dirigente de la AV del Barrio de Hermanos Falcó.

²⁷ Carmen GARCÍA MARTÍNEZ, *La periferia de la ciudad de Albacete*, Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses, 1990, pág. 77.

atraído a la ciudad desde el campo, al que se le ofrece un trabajo en la construcción para que edifique la ciudad de otros y en los ratos libres la suya”²⁸.

Hasta los años finales de la dictadura los esfuerzos oficiales por erradicar el chabolismo no fueron más allá del insuficiente y paupérrimo Barrio Hogar de Educación y Descanso construido en 1944. Posteriormente, ya en la primera mitad de los años setenta, el Instituto Nacional de la Vivienda levantó en Albacete el polígono de Hermanos Falcó, popularmente conocido como *Las Quinientas* por sus 539 viviendas. Éste fue presentado por la oficialidad como la “solución del problema de la posesión de un hogar digno para los trabajadores preceptores de rentas más bajas”. Sin embargo, a pesar de un propósito aparentemente tan encomiable, no fue el principal objetivo de las autoridades subsanar con la construcción del polígono el problema de la escasez de viviendas para trabajadores, sino recalificar socialmente el centro de la ciudad y las zonas del ensanche expulsando al extrarradio, y por tanto a bajo coste, a las clases populares que allí habitaban. En su nuevo destino los habitantes de Hermanos Falcó encontraron un conjunto urbano “abigarrado y de imagen agobiante”, cuya construcción no había llevado aparejada “la creación, a su vez, de los correspondientes servicios como escuelas o dispensarios”. Los militantes comunistas presentes en el barrio denunciaron que varios meses después de la conclusión de las viviendas “las llaves de las mismas no han sido entregadas por no reunir éstas las condiciones mínimas exigidas por el Ministerio de la Vivienda para ser habitadas, y cuando se han entregado a los vecinos éstos han tenido que llevar a cabo numerosas reparaciones, sobre todo en lo que a saneamiento se refiere”²⁹. Por todo ello no extraña que a juicio de algunos vecinos la edificación del polígono de Hermanos Falcó únicamente respondiese a “una cuestión política de la CNS que quería marcarse un farol en hacer 500 viviendas sociales en Albacete para chabolistas sin reunir condiciones”.

Meses después, a iniciativa del Sindicato de Construcción, Vidrio y Cerámica, se levantó la barriada de Pedro Lamata. Se trató de una promoción cooperativista turbia y no exenta de corruptelas, que acusó los mismos problemas de falta de servicios que el resto de barrios y edificaciones de la periferia. En la casi inagotable lista de deficiencias de los equipamientos colectivos en la periferia se pueden citar, y sólo como ejemplo orientativo, las existentes en La Estrella, donde la gran parte de las viviendas eran aún

²⁸ OFICINA MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO, Ob.cit., pág. 46.

²⁹ Fundación Primero de Mayo (FPM). Archivo Historia del Trabajo (AHT). *Boletín de Información Democrática* del PCE (BID), 3, julio 1974, págs. 3-4.

cuevas a la altura de 1974. Como denunció el PCE, allí no existía alcantarillado, “de las calles ninguna está asfaltada”, “no hay ningún tipo de iluminación”, ni escuelas, ni farmacias, ni transportes públicos. Pero no era mucho mejor la situación en el Barrio del Sepulcro donde “los accesos son caminos de tierra”, mientras que en las Cañicas “las empresas de autobuses se niegan a pasar” ante la precaria pavimentación³⁰. Por su parte, en el antes mencionado barrio de Hermanos Falcó no existía servicio de autobuses, ni establecimientos comerciales, ni bares, ni cafeterías. Para acabar, en Puerta de Murcia había problemas de pavimentación, alcantarillado y escolarización. En conclusión, fueron los habitantes de la periferia, principalmente de extracción popular y trabajadora, los que sufrieron con mayor intensidad los perniciosos efectos de una caótica reorganización y división del espacio dictada por las fuerzas del mercado, en connivencia con los excluyentes principios ideológicos del urbanismo franquista, bajo un contexto de alta especulación³¹.

El movimiento vecinal. Un actor social contra las autoridades franquistas

Un estudio elaborado por la Oficina Municipal de Planeamiento de Albacete en 1982 señaló que la acción de las sucesivas corporaciones franquistas sobre las zonas periféricas nunca llegó a establecer “los mínimos equipamientos ni un grado suficiente de urbanización”. Desatención sobre la que “aparece, crece y se consolida –según el mencionado estudio- un movimiento social y reivindicativo que llega a alcanzar una cierta importancia”³². Dicho movimiento vecinal y ciudadano adquirió su máxima expresión y grado de actividad durante los años de la transición, especialmente entre 1977 y 1979. No obstante, sus orígenes, los primeros pasos organizativos y la aparición de las reclamaciones iniciales dataron de los años finales de la dictadura. Principalmente de la primera parte de los años setenta, cuando algunos grupos vecinales fueron lentamente germinando al calor de centros parroquiales y asociaciones de Cabezas de Familia. Hecho que no extraña dada la tendencia de las autoridades franquistas a obviar las peticiones individuales o aquellas que no apareciesen bajo el sello de alguna asociación reconocida. Por este motivo, por ejemplo, entre algunos vecinos de los barrios de San Pedro y Pertusa cundió la idea de que “lo que debemos hacer es una

³⁰ FPM. AHT. *BID*, 3, julio 1974, págs. 3-4.

³¹ Manuel CASTELLS, *Crisis urbana y cambio social*, Madrid, Siglo XXI, 1981. págs. 201-202.

³² OFICINA MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO, ob. cit., pág. 79.

Asociación de Padres de Familia para tratar de una manera más oficial los problemas del barrio”³³.

En estos espacios de la vida social, como clubes, asociaciones, etcétera, a veces independientes de la injerencia del Estado, una minoría de vecinos comenzó a entender la necesidad de solucionar las dificultades más básicas a través de la unión y la organización con el fin de ejercer una presión más eficaz sobre los poderes municipales³⁴. Este fue el caso de una quincena de vecinos del barrio de Hermanos Falcó que decidieron unirse “para solucionar los problemas planteados” ya que –según manifestaron en la prensa- lo que “pedíamos aisladamente era difícil que nos lo dieran”. Así, los más activos y concienciados de las barriadas alzaron la voz para recordar, como en el caso del representante del vecindario de Puerta de Murcia, a “todos los vecinos [...] la necesidad de colaborar colectivamente en la creación de una asociación de vecinos, legalmente constituida, donde todos tratemos de solucionar los problemas de pavimentación, saneamiento, escolaridad, etc.” ante “el olvido, por parte de la autoridad municipal, de llevar a cabo las obras de pavimentación y aceras”.

Como es bien sabido, estas incipientes agrupaciones vecinales comenzaron reclamando unas mejores condiciones de habitabilidad. Entre sus demandas destacaron aquellas relacionadas con la dotación de servicios públicos elementales para sus barrios. Las suyas fueron unas reivindicaciones realistas, asequibles y muy apegadas a la inclemente realidad cotidiana de los barrios. “Lo que tenemos que hacer es andar con tiento y no pedir la luna, sino cosas posibles” decía el presidente de la A.V. de San Pedro a principios de 1977³⁵. Ciertamente, fueron peticiones factibles y urgentes, como “solucionar el problema de los portales en los que cuando llueve entra el agua hasta inundarlos”, las que facilitaron el desarrollo del movimiento vecinal en Albacete. De esta manera, el tono responsable y sensato de este tipo de peticiones vecinales, enraizadas en los problemas más sentidos por los pobladores de la periferia, hizo que un número creciente de vecinos percibiesen en las asociaciones algo propio y cercano, vinculado a la resolución de los problemas diarios más perentorios. Proyección reivindicativa, y aparentemente independiente de partidos y opciones políticas, que atrajo a un mayor número de seguidores cuando se consiguieron arrancar de las autoridades mejoras muy necesarias y esperadas. De este modo, ante lo político o

³³ LV, 16-11-1975.

³⁴ Jordi BORJA, “Popular Movements and Urban Alternatives in post-Franco Spain”, *International Journal of Urban and Regional Research*, núm. 1, 1977, pág. 157.

³⁵ LV, 11-1-1977.

clandestino, considerado como algo peligroso, algunos grupúsculos de ciudadanos encontraron en la acción en los barrios un cauce eficaz para expresar sus inquietudes sociales. En verdad, en opinión de algunos de sus participantes, “aquello es lo que aglutinaba al movimiento, sobre todo reivindicar mejores condiciones de vida, las demandas tenían un contenido reivindicativo en sí mismas que aglutinaba a gente en mayor medida que el contenido político”³⁶.

Sin embargo, la desatención y abandono de los barrios por parte de unos gobernantes locales que no eran representativos y que apenas disponían de recursos hizo que muchos vecinos se sintieran “abandonados de la mano de Dios”. No sin razón, porque tanto el alcalde Gonzalo Botija (1966-1974) como su sucesor Ramón Bello (1974-1978) se negaron en más de una ocasión a emprender las obras de mejoras en los barrios. La habitual justificación se refirió a las exhaustas arcas municipales. Desamparo e indiferencia oficial hacia los barrios, mientras que se sucedían las obras de adecentamiento del centro y del ensanche, que provocó la emergencia de críticas más o menos veladas contra las autoridades políticas. Así, la dejación, ineficacia y autoritarismo con que las autoridades municipales trataron a las barriadas dieron la impresión, como denunciaron algunos de sus moradores, de que los habitantes de las mismas “no tienen derecho a vivir”. Lo que hizo florecer las acusaciones vecinales contra el poder municipal por “no querer saber nada” cuando se trataba de establecer nuevos servicios y equipamientos en aquellas zonas “fuera del casco urbano”. Por ejemplo, en mayo de 1974, los pobladores del barrio de San Pedro se quejaron en carta colectiva de que “cuanto más pobres somos y más necesitados estamos menos nos ayuda la Administración (Delegación de Educación y Ciencia, Ayuntamiento, etc.)”³⁷.

Por su parte, los habitantes de Hermanos Falcó atacaron a un Ayuntamiento que no era “igual con todos sus ciudadanos” porque “no hay dinero para emplearlo en los barrios, pero mientras tanto se llevan a cabo otras obras de no tanta necesidad” en las partes céntricas de la ciudad. Las mejoras prometidas e incumplidas en el barrio de San Pedro y en el Mortero puso a las claras –a juicio de un grupo de vecinos en septiembre de 1975- “el poco compromiso de las autoridades hacia nuestros problemas”. Meses antes, en junio del mismo año, el cura de San Pablo se quejaba de los problemas de salubridad en el barrio, los cuales “ya los hemos puesto en conocimiento del

³⁶ SEFT. Entrevista con Andrés Gómez Beteta (5-4-2005), cura obrero, militante de la JOC y líder del movimiento vecinal. Durante la transición se unió a CCOO y al PCE.

³⁷ LV, 9-10-1974

Ayuntamiento en cartas dirigidas al alcalde de la ciudad, sin que hasta ahora hayamos obtenido respuesta alguna”. En el otoño de 1976 fueron de nuevo los habitantes de Hermanos Falcó los que tomaron la palabra para quejarse porque “aunque seamos pobres tenemos derecho a que se nos atienda (...) siempre nos engañan y sólo se acuerdan de nosotros cuando muere alguien”³⁸. Por tanto, como se puede observar, si bien las iniciales reivindicaciones vecinales únicamente pretendieron mejorar las condiciones de vida en los barrios, éstas fueron adquiriendo un contenido político en tanto que se dirigieron contra unas autoridades indiferentes e insensibles ante los problemas en los mismos.

Además, las exigencias esgrimidas desde la periferia comenzaron a politizarse cuando el estrecho marco legislativo impuesto por el franquismo dejó a los vecinos más activos un reducido margen para corregir las injusticias sufridas. Bajo esta situación aquellos más decididos tuvieron que recurrir a visitas al alcalde, cartas a las diferentes autoridades, comunicados en la prensa, asambleas, recogida de firmas, acciones de desobediencia, apropiación de locales, etcétera, para solventar los agravios padecidos. Formas de reivindicación que en más de una ocasión trasgredieron la legalidad franquista y que inevitablemente comportaron una confrontación, más o menos directa, con las autoridades. El próximo paso no fue otro que la demanda de derechos de reunión, expresión y manifestación, como herramienta imprescindible -que desbordaba los estrechos canales de participación reconocidos- en la defensa y resolución de las deficiencias estructurales de las barriadas³⁹.

Por lo ya comentado no extraña que en el momento en el que los vecinos decidieron movilizarse de diferentes formas para pedir mejoras porque “los problemas de los barrios si no se airean de alguna manera [...] no se solucionan”, chocaron en más de una ocasión con las autoridades⁴⁰. Esto ocurrió, por ejemplo, cuando un “grupo de católicos” vecinos de San Pedro expresaron públicamente su malestar porque las obras acordadas con el alcalde en varias reuniones entre 1974 y 1975 no fueron realizadas. Aunque en algunas ocasiones las autoridades exhibieron una tolerancia limitada – traducida en la realización de ciertas reformas en los barrios- la respuesta del primer edil y del concejal de Barrios no pudo ser más airada, prohibiendo –entre amenazas veladas y descalificaciones- las visitas de los vecinos al Ayuntamiento. Reacción intransigente

³⁸ LV, 26-10-1976.

³⁹ Jordi BORJA, *Los movimientos sociales urbanos*, Madrid, Ediciones Siap-Planteos, 1975, pág. 110.

⁴⁰ LV, 28-9-1975.

que llevó consigo la politización del asunto, el aumento del descontento y la reafirmación de las críticas contra la administración municipal. Así, ante la habitual dejadez y arbitrariedad oficial incluso los vecinos menos involucrados en asuntos sociales y políticos percibieron los obstáculos impuestos por las autoridades franquistas a la actividad reivindicativa para satisfacer las necesidades básicas de sus barriadas. De esta forma, fue creciendo el distanciamiento entre el grueso de los vecinos de las barriadas y unos gobernantes locales cada vez más desacreditados. Una deslegitimación del poder político que adquirió una dimensión mayor al tratarse del peldaño administrativo más cercano a la vida cotidiana de los ciudadanos. Desde esta perspectiva se explica una de las causas del mayoritario voto cosechado por los partidos de izquierdas en las posteriores elecciones democráticas de la transición en estas zonas de la ciudad. Y es que no hay que olvidar que en las primeras elecciones generales de junio de 1977 Alianza Popular obtuvo el 4.3 por 100 de los votos de la periferia, un porcentaje muy alejado del 27 por 100 cosechado en el centro de la ciudad, mientras que el PSOE recogió el 52 por 100 de los votos en los barrios y el PCE el 11 por 100⁴¹. Posteriormente, en 1979 el candidato socialista a la alcaldía de Albacete –un joven abogado relacionado con la acción social en los barrios- alcanzó el bastón municipal gracias al “pacto de progreso” con unos comunistas que consiguieron su mayor volumen de votos en las zonas periféricas de la ciudad.

Aunque mayoritariamente compuesto por gentes cercanas a la oposición antifranquista, el movimiento vecinal no siguió, al menos bajo la dictadura, ninguna consigna de partido. “Desde el primer momento –manifestó un líder de San Pedro- nos hemos empeñado en que esto quede claro [...] la Asociación se ha creado para solucionar los problemas del barrio, nada más. Cada miembro de la misma tendrá sus ideas particulares, pero la Asociación ha de quedar al margen de las mismas”. Pero precisamente dicha voluntad de resolver los problemas vecinales incardinó la actividad del movimiento en el reino de la política, en la interacción conflictiva con unas autoridades desprestigiadas y divididas internamente de las que consiguió arañar mejoras. En efecto, en respuesta a la presión ciudadana, para atraerse al naciente movimiento y ganar un crédito perdido a golpe de escándalos, corruptelas, enfrentamientos internos y franco abandono de los servicios municipales, los sectores más evolucionados del poder municipal aceptaron concertar diversas reuniones con

⁴¹ Juan de Dios IZQUIERDO, *Las elecciones de la transición en Castilla-La Mancha*, Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses, 1984, pág. 140.

representantes de las barriadas para conocer los problemas más urgentes que aquejaban a las mismas. A consecuencia de estos contactos los concejales albacetenses con veleidades reformistas, sobre todo los del tercio familiar, pusieron en funcionamiento una serie de medidas tendentes a mejorar aspectos relacionados con la educación, la higiene, la sanidad y la pavimentación en los barrios. Aunque dichos esfuerzos adolecieron de las limitaciones propias de un gobierno municipal dependiente del poder central, sin recursos y no representativo, al menos expusieron, como señaló la prensa local, que “hasta las cámaras del hemicycleo municipal ha llegado la inquietud por los barrios periféricos y masificados de la ciudad” gracias a la “protesta y el interrogante de sus gentes para que los concejales [reformistas] recogieran las antorchas de las peticiones e intentaran suscitar las atenciones de los demás concejales en los plenos para acelerar el ritmo de las preocupaciones y de las soluciones”⁴². Sobre esta cuestión también se puede decir que los pobladores de la periferia aprovecharon la emergencia de actitudes aperturistas en el seno de la Corporación, debilitada por enfrentamientos internos, para establecer una nueva relación entre los barrios y el Ayuntamiento y facilitar el despegue del movimiento vecinal en la capital provincial.

En dicha eclosión del movimiento vecinal en Albacete estuvieron presentes, junto a los vecinos, los militantes de la JOC, de la HOAC y los curas obreros de las nuevas parroquias de los barrios. Estos jóvenes sacerdotes buscaron vivir su vocación de una forma más intensa en “presencia de un mundo obrero del que la Iglesia estaba de espaldas totalmente”. Con tal fin trasladaron su residencia a los barrios de clase trabajadora de la periferia porque para conocer su problemática “había que vivir como vivía la gente”⁴³. Así, la implicación de sacerdotes y militantes de los movimientos cristianos ofrecieron al movimiento vecinal una importante cobertura y sostén. En barrios como San Pedro o Hermanos Falcó la reivindicación vecinal “surgió y nació” de la iniciativa de unos cuantos vecinos que se “movían en torno al cura obrero”. Por otro lado, el movimiento vecinal también disfrutó, al igual que el movimiento obrero, del apoyo, asesoramiento e implicación de jóvenes profesionales. Principalmente se trató de la ayuda técnica y organizativa prestada por sectores de jóvenes socializados en una universidad perdida para el régimen. Éstos jóvenes, a veces comprometidos con la oposición política, aportaron un indispensable soporte para el crecimiento del

⁴² LV, 7-5-1975.

⁴³ SEFT. Entrevista con Juan Fernández (5-4-2006), cura obrero, militante del movimiento vecinal y dirigente de la HOAC.

movimiento vecinal. Quienes organizaron el movimiento asociativo en Albacete siempre tuvieron muy clara la necesidad fundamental de “buscar asesoramiento” y de encontrar “algún abogado, algún médico, incluso alguna enfermera”, dispuestos a “echar una mano”. En la batalla contra la junta dirigente de la cooperativa de viviendas de Pedro Lamata, los vecinos contaron con la ayuda de un abogado laboralista vinculado al PCE y a CCOO. Igualmente, los pobladores de Hermanos Falcó eligieron en asamblea una comisión que, con asesoramiento de jóvenes urbanistas, supervisase las obras de reforma del barrio.

Sus reivindicaciones y las del resto de barrios de Albacete encontraron una notable difusión gracias a la labor de jóvenes periodistas comprometidos con la problemática ciudadana. Un buen ejemplo a este respecto fue el periódico *La Verdad* que, bajo una coyuntura en la que la prensa de provincias encontró una mayor capacidad de expresión acerca de los temas de índole exclusivamente local, percutió constantemente sobre asuntos de interés en los barrios. Como relata un militante vecinal en “aquella época las asociaciones de vecinos y los barrios tenían mucha relación con la prensa [...] además en *La Verdad* había un director que estaba muy unido al movimiento vecinal”⁴⁴. Así, bajo la recelosa mirada de las autoridades locales *La Verdad* sacó a la palestra pública denuncias referidas a las epidemias, los estercoleros incontrolados, los colegios incendiados, la existencia de aulas y escuelas sitas en barracones, la carencia de transportes públicos en algunos barrios, los problemas de alcantarillado, alumbrado o tráfico, etcétera⁴⁵. A través de este periódico de tendencia democristiana las reivindicaciones vecinales adquirieron mayor capacidad de presión sobre las estancias de poder municipal. De ello fue consciente un vecino que en marzo de 1975 confió en que la descripción, publicada en este periódico, de la penosa situación en su polígono de viviendas sirviese “para convencer a quienes competa”⁴⁶.

Si en algunos barrios la activación del movimiento recayó sobre curas obreros y organizaciones de apostolado en otras zonas, como Pedro Lamata, llegó “gente con un mayor compromiso de partido” que “estaba metida en grupos como el PCE”⁴⁷. Allí el movimiento vecinal descansó sobre activistas de la oposición dispuestos a aprovechar

⁴⁴ SEFT. Entrevista Juan Fernández (5-4-2006).

⁴⁵ Véase Óscar J. MARTÍN GARCÍA, “Antes de la transición, la lucha por la libertad. El papel de la prensa de provincias en el desgaste de la dictadura. *La Verdad de Albacete (1973-1977)*”, *III Congreso Internacional Historia de la transición en España. El papel de los medios de comunicación*. Seminario de Estudios del Tiempo Presente. Almería, noviembre 2007.

⁴⁶ LV 18-3-1975

⁴⁷ SEFT. Entrevista con Juan Fernández Selva (18-1-2006)

cualquier oportunidad para responsabilizar a las autoridades municipales de los problemas y carencias existentes en los barrios y orientar la protesta contra las instituciones políticas. Desde el verano de 1975 el principal caballo de batalla política de los vecinos de Pedro Lamata fue la denuncia de corrupción de la junta gestora de la cooperativa de viviendas del barrio. Promovida desde el Sindicato de la Construcción por el presidente falangista del mismo y vicepresidente del Consejo Provincial de los Trabajadores (CPT), la cooperativa tuvo una gestión poco transparente no exenta de escándalos. Por ello no tardaron en llegar las denuncias de los cooperativistas ante la falta de información sobre la administración económica, la venta irregular de locales, la ocultación de beneficios, etcétera. Como medida de fuerza, tras varias reuniones y asambleas, los vecinos se negaron a pagar las cuotas al Sindicato de la Construcción y expresaron su malestar ante varias autoridades provinciales a las que hicieron saber de sus “muchas y desagradables sospechas en relación con el estado de cuentas que la junta rectora mantiene con respecto al coste de las viviendas”. Además, los vecinos también reclamaron una mayor participación. Pidieron que “sea la asamblea quien decida” en los asuntos de una cooperativa en la que hasta entonces la junta rectora había dispuesto de “plenos poderes para hacer y deshacer”. La presión y movilización de los vecinos, aunque se hizo esperar, surtió efecto cuando, ya en agosto de 1977, los cooperativistas consiguieron la dimisión de la junta rectora y la elección democrática de una nueva en asamblea⁴⁸.

Sin embargo, esta actitud combativa y poco condescendiente le valió a la AV de Pedro Lamata la animadversión de las autoridades locales. Ya desde sus primeros pasos a principios de 1975 fuentes oficiales acusaron a la misma de ser un “nido de rojos”. El propio vicepresidente del CPT “dijo personalmente que pondría todos los medios para que la asociación no se legalizara” y, de hecho, aunque la AV de Pedro Lamata depositó sus estatutos en el mes de marzo de 1976, no recibió el visto bueno de las autoridades pertinentes hasta el 18 de junio de 1977. Los vecinos achacaron la obstaculización y el retraso en la legalización de su asociación al boicot oficial “para que los trapos sucios de la cooperativa no salieran”. Así, las cortapisas y trabas oficiales impuestas al desarrollo de las reivindicaciones vecinales trabaron las reclamaciones comunitarias con las demandas de una participación más libre.

⁴⁸ LV, 10-8-1977.

En definitiva, en la acción de los vecinos quedó aunada la necesidad de resolver los problemas más acuciantes de los barrios con la falta de responsabilidad política de los gobernantes locales y la inexistencia de unos cauces políticos válidos para expresar las reivindicaciones ciudadanas. Desatención oficial e inexistencia de libertad de asociación y expresión que llevó a los pobladores de la periferia al enfrentamiento con las autoridades y, consecuentemente, a los límites de una legalidad cuya transgresión orilló los pilares del franquismo.

Epílogo. Ascenso y decadencia del movimiento vecinal.

La pujante presión social y la convulsa situación política que siguió a la desaparición del dictador llevaron a incluir en la agenda de la democratización buena parte de las reivindicaciones emanadas de la lucha desde abajo protagonizada por diferentes actores sociales. Entre ellos, el compuesto por los ciudadanos de las periferias urbanas. Una vez abiertas las compuertas de acceso a la arena política se produjo una explosión de entusiasmo popular y de participación política masiva a lo largo y ancho del país. Expectativas de cambio que se tradujeron en unas altas tasas de afiliación en centrales sindicales, partidos políticos y asociaciones de vecinos⁴⁹. Como resultado de esta efervescencia social el asociacionismo vecinal en la capital y en las principales manifestaciones urbanas de la provincia creció y se consolidó durante la transición, especialmente entre 1977 y 1979. La legalización de la primera asociación de vecinos de la provincia de Albacete, la del barrio Hermanos Falcó de la capital, tuvo lugar en enero de 1977. A la misma siguieron, durante ese mismo año, las de los barrios de San Roque y San Juan en Almansa y las de San Pedro, el Hospital y Pedro Lamata en Albacete⁵⁰. Ésta última se encontraba en el limbo gubernativo desde marzo de 1976. También sufrió el retraso gubernativo durante varios meses la AV de la Zona Sur de Hellín, cuya junta promotora había pedido su legalización a principios de 1977. En los dos años siguientes, 1978 y 1979, con la llegada de la democracia, aparecieron otras

⁴⁹ Óscar J. MARTÍN GARCÍA, “Albacete: de la balsa de aceite a la conflictividad social”, Manuel ORTIZ HERAS, (coord.), *Los movimientos sociales en la crisis de la dictadura y la transición: Castilla-La Mancha, 1969-197*, Ciudad Real, Añil, 2008, pág. 57.

⁵⁰ Una fuente de primer orden para el estudio del asociacionismo vecinal durante la transición es el registro de asociaciones, que en ya ha sido trabajado en Manuel ORTIZ, “Movimientos sociales y sociabilidad en Castilla-La Mancha durante el segundo franquismo” en Abdón MATEOS y Ángel HERRERÍN (eds.), *La España del presente. De la dictadura a la democracia*. Madrid, Historia del Presente, 2006.

doce asociaciones en diferentes partes de la provincia como Agramón, Pozohondo, El Salobral, Casas Ibáñez, Valdeganga, etcétera⁵¹.

Después de la democratización de las instituciones centrales del Estado durante la primera mitad de 1977 la administración municipal continuó rigiéndose por la Ley de Bases de 1945, controlada por un personal político nombrado bajo los auspicios de la democracia orgánica franquista. Como comentó el periódico *La Verdad* días después de los comicios “mientras que la mayoría de los españoles han votado a favor de la democracia todavía se ven dirigidos en su vida municipal por quienes pertenecen al otro sistema”. Con el propósito de acabar con dicha situación las AAVV aumentaron su protesta contra el Ayuntamiento no democrático durante los meses transcurridos entre la celebración de las elecciones generales en junio de 1977 y las municipales de abril de 1979. Buen ejemplo de ello fue la manifestación de unas dos mil personas, en diciembre de 1977, por la muerte de un niño atropellado en Hermanos Falcó. Al tiempo que gritaron que “los barrios jamás serán vencidos”, los numerosos manifestantes protestaron por estar “hartos de muertes en la carretera” y reclamaron “más puentes y no más muertes”. Ante el intento de dispersión por parte de la policía los vecinos se mantuvieron firmes y consiguieron forzar una reunión con el alcalde y el gobernador civil. Resultado de la misma se tomaron una serie de medidas (semaforización, vallado, etcétera) largo tiempo demandadas entre los grupos vecinales⁵². El objetivo de ésta y otras exhibiciones de disenso ciudadano no fue otro que forzar la convocatoria de elecciones, acelerar y profundizar el proceso de democratización en el ámbito local y evitar la perpetuación municipal de los rescoldos del franquismo a nivel municipal⁵³.

El movimiento vecinal fue adquiriendo una progresiva influencia en la política local durante la transición. De hecho, reflejo del calado de las reclamaciones vecinales en el tejido social de la ciudad, prácticamente todos los candidatos de los partidos políticos que concurrieron a las elecciones municipales de abril de 1979 incluyeron en sus programas y en sus campañas electorales asuntos directamente relacionados con las reivindicaciones vecinales (descentralización, participación vecinal en la gestión municipal, solución de problemas urbanísticos, etcétera). Sin embargo, los momentos de mayor proyección pública del movimiento vecinal coincidieron con los primeros síntomas de su decadencia y estancamiento. Ello fue debido en parte al carácter pactado

⁵¹ AHPGC. Derechos ciudadanos. Asociaciones. Caja 765.

⁵² LV, 8 y 10-12-1977.

⁵³ Óscar J. MARTÍN GARCÍA, *Albacete en transición*, ob. cit., págs. 195-221.

que adoptó el cambio político en nuestro país. Ciertamente, la salida reformista al largo túnel de la dictadura desvió el centro de la acción política de la lucha en la calle a la negociación monopolizada por los partidos⁵⁴. Durante el proceso éstos quedaron encumbrados casi como los únicos y legítimos actores políticos de la nueva democracia, declinando ceder parte de su recién estrenado poder ante las alternativas ciudadanas de base que habían germinado en la esfera municipal.

Con este objetivo, en Albacete como en otras muchas partes de España, los partidos políticos de la izquierda parlamentaria debilitaron a las asociaciones de vecinos cuando “con las primeras elecciones democráticas municipales la mayoría de los cabezas del movimiento vecinal se enrolaron en las candidaturas de los partidos políticos”⁵⁵. Una estratagema, además, no exenta de motivaciones electorales ya que, como cuenta un militante vecinal, el “voto del centro de la capital” estaba mayoritariamente vinculado a las siglas centristas y neofranquistas de UCD y AP, mientras que en los barrios periféricos, “donde está todo el movimiento vecinal”, era donde la izquierda podía “sacar su tajada”. En la periferia los socialistas contemplaron la llave para obtener la alcaldía y los comunistas la posibilidad de mejorar los anteriores resultados electorales. De este modo, desde el otoño de 1977 la anterior lucha conjunta contra la dictadura quedó transmutada en la competencia por obtener la mejor situación de cara a los comicios municipales. A consecuencia de dicha pugna, y gracias a la doble militancia de varios de sus líderes, las asociaciones vecinales pasaron a ser mero instrumento de las estrategias electoralistas y de propaganda de los dos principales partidos de la izquierda. Así se puso de relieve en el duro enfrentamiento mantenido en septiembre de 1977 entre las asociaciones de Hermanos Falcó, controlada por el PSOE, y la de Pedro Lamata, bajo influencia del PCE. No le faltó razón, por tanto, a la CNT cuando denunció en aquellos días que las asociaciones vecinales de la ciudad estaban siendo instrumentalizadas por sus partidos más cercanos “de una forma absolutamente clara como maniobra política para las elecciones municipales y sindicales”⁵⁶.

Finalmente, tras las municipales de 1979 varios líderes vecinales abandonaron el movimiento ciudadano para ingresar en la Administración municipal. Consideraron que la leal compromiso desde dentro de las instituciones era una “de las mejores formas para

⁵⁴ Sebastian BALFOUR, *La dictadura, los trabajadores y la ciudad*, Valencia, Alfons el Magnánim, 1994, págs. 245-246.

⁵⁵ SEFT. Entrevista con José María Roncero (22-6-2005), militante vecinal y de las comunidades cristianas de base.

⁵⁶ LV, 27-9-1977.

trabajar por nuestro barrio” y, de hecho, su labor se tradujo en una mejora de las condiciones de la periferia y, con la colaboración de los urbanistas progresistas del Ayuntamiento, en la renovación urbanística de la ciudad. Sin embargo, la institucionalización del movimiento “descabezó” y acabó desmovilizando a unas asociaciones cada vez más vaciadas de capacidad combativa. En los años siguientes el movimiento vecinal de Albacete, como en otras muchas partes de España, se convirtió en un “ente caduco”, en una promesa incumplida de democracia participativa prematuramente engullida por los partidos políticos y la administración municipal.